

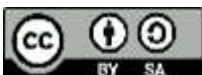
## La privatización de la violencia en Colombia y las AUC: de las autodefensas al paramilitarismo contrainsurgente y criminal

The violence's privatization in Colombia and the AUC (Self-defenses United of Colombia): From the self-defenses to the counterinsurgent paramilitarism and criminal

Patricio García Pérez\*

---

\* Chileno, Profesor, Licenciado, Magister y Doctor © en Historia, Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile, [patricio.garcia.p@usach.cl](mailto:patricio.garcia.p@usach.cl)



### Resumen

El artículo se inserta en el debate historiográfico acerca de la privatización de la violencia presente en la historia colombiana desde el siglo XIX. Sostenemos que las autodefensas devenidas en paramilitares se construyeron en la última parte del siglo XX con la complicidad y apoyo de ganaderos, elites locales e integrantes del Ejército. Ha sido clave la conducción de mafiosos narcotraficantes federados en las AUC en 1997, que agreden al movimiento popular, la izquierda política y la población civil, desplegando una estrategia de copamiento del Estado.

**Palabras Clave:** Autodefensas, paramilitarismo, contrainsurgencia, conflicto interno, paraestatal, guerra sucia.

### Abstract

The following article exposes the discussion about violence's privatization present in the Colombian's history since the 19<sup>th</sup> Century. We argue that the self-defenses (autodefensas) under the form of paramilitaries who were built in the last part of 20<sup>th</sup> Century with the complicity and the support of ranchers, local elites and Army's members. The drugtraffickers and mafia's conduction who were federated in the AUC has been very important, who do damage to the popular movement, the political left and the civil population in 1997. They are deploying a strategy of State takeover.

**Keywords:** self-defense, paramilitary, counterinsurgency, internal conflict, parastatal, dirty war.

Recibido: 2 octubre 2015

Aceptado: 11 diciembre 2015

## Introducción

El conflicto armado colombiano, que se extiende desde la década de los 60, ha sido el más extenso en América Latina, convirtiéndose en un objeto de análisis de interés para los científicos sociales debido a sus complejas causas, múltiples actores, y capacidad para superar los lineamientos de la política internacional. Sobre sus actores intervinientes se han desarrollado investigaciones referidas a las organizaciones guerrilleras, el narcotráfico o las políticas del Estado. En menor medida y desde inicios del siglo XX, se han indagado las AUC, el otro actor del conflicto.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) agruparon en el momento de su fundación oficial a 9 organizaciones paramilitares de las existentes en el país, que a modo de degeneración de las tradicionales y atávicas Autodefensas, se convirtieron en una entidad armada paraestatal, vital en el extenso y multiactoral conflicto interno. Contaron, desde un comienzo, con el apoyo de las elites locales, regionales, legislativas y los partidos de la derecha (en particular el liberal), narcotraficantes y el alto mando del ejército. Se vincularon tempranamente a las redes del narcotráfico y sus principales organizaciones como el cartel de Medellín transformándose en lo que se denomina "actor criminal



transnacional" dentro de la nueva historia de las relaciones internacionales<sup>1</sup>. Desarrollaron tareas contrainsurgentes, de guerra sucia, con la meta de perpetuar las relaciones de clase en la frontera interior del país, fijando como objetivo militar a las organizaciones políticas de la izquierda como la Unión Patriótica UP, defensores de los derechos humanos, dirigentes sindicales, sociales, estudiantiles, campesinos y la población civil e indefensa. Las consideraciones acerca de su origen y accionar no se puede deslindar de la tradición de privatización de la violencia de Colombia y la falta de Estado. Las AUC fueron consideradas una organización terrorista internacional entre los años 2001 y 2014, y se inscribieron en un discutido proceso de desmovilización conocido como "Ley de Justicia y Paz", del Presidente de extrema derecha y perfil militarista Álvaro Uribe Vélez.

En este artículo revisaremos el debate teórico acerca de los conceptos de paramilitarismo y autodefensa, utilizados indistintamente para caracterizar a los actores de la violencia paraestatal en Colombia, ejercicio necesario para precisar la categoría que utilizaremos para describir a las Autodefensa Unidas de Colombia. En efecto, el paramilitarismo fue el punto de llegada del conflicto interno colombiano, cuyos orígenes radican en experiencias de autodefensa anteriores, las cuales desembocaron en esta, de carácter paramilitar.

Lo que denominaremos como la "privatización de la Violencia" en Colombia, tiene una larga historia que se extiende desde los inicios de la vida Independiente del país<sup>2</sup>. Vinculada dialécticamente con la pérdida del "monopolio de la fuerza" y el control territorial por parte del Estado, constituye, según analistas del conflicto interno colombiano, una de sus causas fundamentales.<sup>3</sup> En esta línea, Malcom Deas ha señalado que "Colombia ha sido a veces un país violento. Las guerras del siglo XIX que pueden considerarse nacionales fueron las de 1830-31, 1839-42, 1851, 1854, 1860-62, 1876-77, 1885, 1895 y 1899-1902<sup>4</sup>. Es decir, un total de ocho guerras civiles en que se enfrentaron los dos principales partidos por el control del Estado y que habrían de culminar en 1901 en la llamada "Guerra de los Mil Días". Este enfrentamiento significó para el país la escisión del territorio panameño, bajo injerencia directa de los EEUU. A estas guerras civiles, que dada su frecuencia involucraron a todas las generaciones de colombianos del siglo XIX, habría que agregar las "rebeliones que suman 50 para la misma temporalidad"<sup>5</sup>.

La pérdida o el deterioro de la fuerza estatal fueron un catalizador de la violencia y el conflicto que, aunque permanente en la historia, se amplificó en su significación durante el siglo XX. Este proceso ha sido denominado como de formación y afianzamiento del Estado "en reversa"<sup>6</sup>, provocando su "colapso",<sup>7</sup> es decir, la disolución del Estado, guerras

<sup>1</sup>Pereira Juan Carlos (coord.), "Historia de las relaciones internacionales contemporáneas", Editorial Ariel Ciencia Política, Barcelona, España, 2009.

<sup>2</sup>Palacio Marco Antonio, "Violencia Política en Colombia 1958-2010"

<sup>3</sup>Romero Mauricio, Medina Carlos, Palacio Marco, Sánchez Gonzalo, Rangel Alfredo, Pecaute Daniel, Deas Malcom, Cubides Fernando, Pizarro Eduardo, Garzón Juan Carlos.

<sup>4</sup>Deas Malcom, "Reflexiones sobre la violencia política en Colombia", Bogotá Taurus, 1999.

<sup>5</sup>Palacio Marco op. cit. est.

<sup>6</sup>Romero Mauricio, "Paramilitares y Autodefensas 1982-2003", IEPRI, Bogotá 2003

<sup>7</sup>Oquist Paul, "Violence Conflict and Politics in Colombia", New York Academy Press, pp XIV- 263.



civiles y violencias. Esta realidad está en el origen del conflicto colombiano durante el siglo XX, convirtiéndose en una expresión de los conflictos de “nuevo tipo o “*new wars*” (Kaldor)<sup>8</sup> que se expanden por el planeta en Estados nuevos o débiles, es decir en situaciones objetivas de “perdida el monopolio de la fuerza”. Es un caso único en Sudamérica. Estos nuevos escenarios de conflicto de tipo interno crecieron una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945. Desde esa fecha y hasta 1995: “El 77% de los 164 guerras entre 1945-1995 fueron internas en que el combate armado no era contra otro Estado sino contra las autoridades del Estado o entre comunidades armadas dentro del mismo territorio”<sup>9</sup>.

Se trata de “nuevas guerras”, cuyas motivaciones son políticas pero al mismo tiempo económicas, impulsadas por actores diversos: etnias, grupos locales o regionales. Se caracterizan porque desaparecen las viejas reglas de los conflictos denominados “old wars”: “Son guerras sin reglas ni etiquetas”<sup>10</sup>. En estas, las víctimas no provienen de los combatientes enfrentados, sino de la población civil e indefensa, ya sean integrantes de etnias, como en la experiencia de Ruanda o Bosnia, o campesinos a los que se quiere expulsar de la tierra para concentrar la propiedad y apropiarse de los recursos en sus manos, como ocurre en el caso de Colombia. Estos escenarios de violencia se producen en espacios desinstitucionalizados, con Estados débiles o colapsados. Son guerras en las cuales, según señala Kaldor, se deben unir los intereses políticos con los económicos de los grupos u organizaciones en disputa. Esto significa que no solo se trata de la toma del poder o la imposición de los particulares referentes ideológicos, sino también de la lucha por la depredación y uso en beneficio propio de los recursos económicos, llámense estos la tierra, la coca (Colombia), los diamantes (Liberia) o el coltan (Congo).

Siguiendo los planteamientos del barón Von Clausewitz, adaptados a la época de la globalización, “la guerra es la continuación de la política y la economía con otros medios”. El Estado debiera “hacer uso de la fuerza como parte del ejercicio de poder y debe utilizarla en forma racional y legal”,<sup>11</sup> sin embargo, cuando no está en condiciones de hacerse cargo de esta tarea, los aparatos de violencia aparecen distribuidos en la sociedad. Así., el Estado se dota o utiliza otras modalidades u organizaciones para ejercer el control territorial y el respeto de la institucionalidad. También es probable que se formen y fortalezcan fuerzas organizadas que aspiran y apuntan al derrocamiento del Estado existente.

En el caso de Colombia, el historiador Carlos Medina Gallego señala que la violencia parainstitucional es la ejercida por los paramilitares de este país, agrupados en la AUC. El objetivo de éstas no sería “la transformación de la sociedad sino que “garantizar, complementar y suplementar su adecuado funcionamiento cuando el Estado no está en condiciones de hacerlo por las limitaciones que tiene en todos los órdenes”<sup>12</sup>. Por su parte, la violencia “contraestatal” correspondería a aquella desplegada por las organizaciones

<sup>8</sup>Kaldor Mary, “New and old Wars organized violence in a global era“, Polity Press, 2012, UK.

<sup>9</sup> Romero Mauricio, Op. cit. pp.45

<sup>10</sup> Romero Mauricio, Op. cit.

<sup>11</sup> Medina Gallego Carlos, “La Violencia parainstitucional paramilitar y parapolicial en Colombia”, Rodríguez Quito Editores, Bogotá, 1994, pp.43

<sup>12</sup> Medina, Op. cit., pp 45



guerrilleras desde mediados de la década de 1960, que enfrentaron a través de la violencia armada al Estado en la perspectiva de su captura, con la finalidad de transformar el sistema económico, político y social. Es en ese punto del conflicto, con un Estado que se encuentra debilitado o “colapsado”, cuando existiría “la posibilidad real que en el ejercicio del monopolio del poder, la fuerza sea usurpada al Estado por otra agencia, dando origen a prácticas de coacción no institucionalizadas o no reconocidas legalmente por el Estado”<sup>13</sup>.

Tal es el escenario político en que se produce la “privatización de la violencia” por agentes no estatales. Desde nuestro punto de vista, esta modalidad caracterizó el marco del conflicto colombiano y sus múltiples actores en la segunda mitad del siglo XX, como es el caso, que analizaremos, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estas cohesionaron estructuras paramilitares dispersas por el territorio en particular en la región norte, Magdalena medio y Caribe en 1997. Se trata de grupos de autodefensas devenidos en paramilitares. Como lo señala el investigador Juan Carlos Garzón, siempre los paramilitares fueron en sus inicios autodefensas, lo que definitivamente no ocurre en sentido contrario<sup>14</sup>.

La hipótesis que recorre esta investigación señala que las AUC fueron el resultado de una larga historia de privatización de la violencia en el país, articulándose como una entidad política y militar expansiva, de carácter paraestatal y transnacional, poseedora de un discurso contrainsurgente, anticomunista. Su funcionamiento fue heterogéneo y federativo, con importante autonomía de sus Bloques regionales. En su período de mayor auge (1999-2002) su accionar fue movilizadopor intereses internos y externos vinculados al negocio de las drogas y de las élites regionales y nacionales, que los visualizaban como una fuerza capaz de resolver violentamente el conflicto de clases, sellando el statu quo de la dominación y eliminando por medio de la guerra sucia a las organizaciones sociales, dirigentes sindicales y a la izquierda política.

En este sentido, estimamos que expresan la incapacidad de las élites nacionales que dirigían el Estado, para impulsar un proyecto nacional moderno y democrático capaz de mantener el orden público, el control territorial y el respeto a los derechos humanos. Las AUC se diferencian de otras formas de paramilitarismo de la guerra sucia en América Latina, como los Patrulleros de Guatemala (PAC) y las rondas campesinas de Perú, por su estrategia de cooptación y captura del Estado desde el nivel local hasta el ejecutivo. Conjuntamente con lo anterior, y desde la nomenclatura de la historia de las Relaciones Internacionales, tuvieron la capacidad de convertirse en actores transnacionales no legales, es decir, “grupos que desarrollan actividades delictivas como tráfico de armas, drogas, tráfico de seres humanos y falsificaciones incluido el terrorismo”<sup>15</sup>, actividades que poseen un alto impacto social y político obligando a los Estados a desarrollar políticas específicas para enfrentarlo que han adquirido una modalidad global con la declaración del 29 de septiembre del 2001 de las Naciones Unidas, que aprobó la decisión de todos sus miembros

<sup>13</sup> *Idem*

<sup>14</sup> Garzón Juan Carlos “La complejidad Paramilitar: una aproximación estratégica” en “El Poder Paramilitar” de Alfredo Rangel y otros, Ed. Planeta Bogotá 2005, pp. 46-134.

<sup>15</sup> Pereira Juan Carlos (coord.), “Historia de las relaciones internacionales contemporáneas”, Editorial Ariel Ciencia Política, Barcelona, España, 2009.



de luchar contra las organizaciones sindicadas como terroristas, entre las que se encontraba las AUC.

El concepto de “actor no estatal” ha sido acuñado por el investigador Luis Fernando Trejos en referencia a la guerrilla izquierdista FARC-EP. El autor adopta la caracterización de estos actores a partir de la forma en que se relacionan con el Estado, distinguiendo entre “paraestatales y contraestatales”<sup>16</sup>. En el caso de nuestro trabajo, se trata de abordar a las AUC desde esta matriz, definiéndolas como un actor “paraestatal” por dos razones

- a) Realizaban tareas de contrainsurgencia y control del orden público que el Estado y sus organizaciones armadas no estaban en condiciones ni posibilidades de hacer. No obstante que instituciones como el Ejército Nacional les prestaban diversas y clandestinas formas de colaboración y apoyo logístico o material.
- b) Eran paraestatales pues en sus tareas represivas reemplazaban al Estado, ofrecían apoyo social y promovían aspiraciones políticas, que a diferencia del resto del paramilitarismo latinoamericano, las orientaba hacia la conformación de micro estados y en acciones en pos de capturar el Estado desde dentro en la llamada parapolítica. Sus lineamientos ideológicos eran pobres, débiles y poco sustanciosos. Predominaba en estos un anticomunismo primitivo, la defensa del orden, del statu quo y las jerarquías sociales y de la propiedad privada.

## 1. Las Formas de privatización de la violencia un debate necesario ¿Autodefensas o Paramilitares?

Las AUC constituyeron, desde nuestro punto de vista, una forma organizada de ejercer la violencia, que aspiró a aglutinar estructuras de autodefensas repartidas en la fragmentada geografía colombiana. Su modalidad de uso de la violencia fue distinta a la del Estado, aunque como queda documentado en sus actuaciones, fue tributaria de la Guerra Fría. Esto quedó expresado en las definiciones de sus dirigentes más significativos, como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que se amparaban en un discurso anticomunista y antisubversivo. Además, eran apoyados y sostenidos por élites locales y regionales refractarias a las reformas democráticas que impulsaba el Estado central y a las negociaciones de paz con la guerrilla. Al mismo tiempo, fueron capaces de levantar e impulsar una exitosa política de expansión territorial, apropiación y concentración de la tierra.<sup>17</sup> Desde el punto de vista político, desarrollaron un accionar que les permitió no sólo dominar el poder local y regional, sino que también ocupar una parte del Estado -el poder

<sup>16</sup> Trejos Luis Fernando, “Un actor no estatal en el escenario internacional el caso de las FARC-EP (1966-2010)”, Grupo Editorial Ibáñez-Universidad del Norte Barranquilla Colombia, 2015.

<sup>17</sup> Gibson Edward “Subnational Authoritarianism Territorial Strategies of Political control in Democratic Regimes”, Northwestern University, September 25, 2004 en López Claudia op. cit.

legislativo- y manejarlo en función de sus intereses<sup>18</sup>. Finalmente, por las características de su quehacer, fueron sindicados como organización terrorista internacional tras el 11 de septiembre del 2001, condición en la que permanecieron hasta mayo del 2014, lo que los convirtió en un actor transnacional de las nuevas guerras del siglo XXI.

A la hora de analizar su origen histórico, debemos en primer término dilucidar el carácter de la organización para resolver así una aparente contradicción, expresada en la caracterización que abre esta sección. En efecto ¿se trata de grupos paramilitares o de autodefensas? Estos conceptos han sido utilizados de modo confuso y contrapuesto para denominar a las AUC, lo que nos parece un error conceptual. Los análisis de prensa denominan a las organizaciones armadas y que usan la violencia en la historia de Colombia, muestran que se han usado al mismo tiempo estas categorías sin mayor rigurosidad. Esta situación requiere al menos una revisión teórica para definir desde donde se sitúa nuestro trabajo sobre las AUC.<sup>19</sup>

En esta discusión distinguimos tres posturas interconectadas. En primer término, los trabajos de Kalyvas-Arjona<sup>20</sup> entregan un amplio marco conceptual sobre el tema. Para los autores, las autodefensas pueden ser definidas como “una organización armada, aunque no todos sus miembros porten armas o participen en acciones violentas. Se trata de una organización defensiva de carácter local o regional, quienes la integran tienen una vocación distinta a la militar”.<sup>21</sup> Ambos autores remarcan lo que consideran una confusión de términos entre autodefensas, paramilitarismo, escuadrones de la muerte y vigilantes, pues se trata de “una definición que a partir del accionar en terreno, se usa de modo confuso y erróneo”. En su opinión, estas definiciones provienen de las caracterizaciones de los “escuadrones de la muerte”<sup>22</sup>.

En efecto, grupos con tales denominaciones formaron parte del accionar contrainsurgente -en consecuencia, paramilitar- en Guatemala en la década de 1980. Sin embargo, eran distintos en su conformación. En este país centroamericano, asolado por un conflicto interno desde la década de los '60 y hasta 1989, los escuadrones de la muerte fueron creados durante el gobierno del presidente Julio César Méndez Montenegro. Marcadamente anticomunista, este suscribió acuerdos con los militares con vistas a la exclusión comunista. Este gobierno organizó en 1966, con apoyo logístico y técnico de los EEUU, grupos de civiles “escuadrones de la muerte” que usaron desapariciones forzadas y asesinatos selectivos.<sup>23</sup> Además, llevaron adelante operaciones militares y de inteligencia en contra de la guerrilla, controlando a la población y el orden interno. Su accionar incluía la detención, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de quienes eran considerados subversivos. Este tipo de organizaciones se adecuan a las definiciones

<sup>18</sup>López Claudia, op. cit.

<sup>19</sup> Trejos Rosero Luis Fernando “Actividad Paramilitar en la ciudad de Barranquilla crimen organizado y mercados de la violencia”, Revista de Economía del Caribe, Barranquilla, 2015

<sup>20</sup> Stathis Kalyvas y Arjona Ana, “Paramilitarismo: una perspectiva teórica” en “El poder paramilitar”, op. cit., pp. 24-45.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p.28.

<sup>22</sup> Garzón Juan Carlos, Op. cit.

<sup>23</sup> “Guatemala en la encrucijada del conflicto”, Secretariado de la declaración de Ginebra, Ginebra 2011.



utilizadas para los “escuadrones de la muerte”, diferentes aunque cercanos en sus procedimientos a los paramilitares.

Los escuadrones de la muerte eran “organizaciones clandestinas y usualmente irregulares, con frecuencia de naturaleza paramilitar”, que llevaban a cabo ejecuciones extrajudiciales y otros actos violentos (torturas, violaciones, incendios) en contra de personas o individuos. Para este tipo de organizaciones, los asesinatos eran su actividad principal, “operando con total apoyo, complicidad o consentimiento del Estado o por lo menos de algunas partes de él”<sup>24</sup>.

Los paramilitares, categoría que en nuestra opinión corresponde a las AUC, han sido definidos de modo muy particular. Para Fernando Cubides<sup>25</sup>, al hablar de paramilitares se está haciendo referencia a grupos irregulares del Estado que buscan sustituirlo en vez de tomar control de él. de acuerdo a este autor, los grupos paramilitares presnetan ciertas dimensiones características, como el tamaño, pudiendo encontrarse desde vigilantes locales hasta ejércitos móviles, los que logran poder político, militar y económico. La población que participa es otro criterio. En Guatemala las CAS de 1985 llegaron a involucrar a un millón de personas en varios tipos de patrullaje de sus comunidades. Otro elemento diferenciador son los escenarios en que actúan, como por ejemplo el caso de la DINA en Chile, o los contextos de “defección étnica” como los africanos de finales del siglo XX, los de colonización como en Kenya o Argelia, en que se forman milicias auxiliares, o las Autodefensas Campesinas de Perú, de composición aymara predominante, que en los años 90 derrotaron, con el apoyo del régimen de Alberto Fujimori, a la guerrilla Sendero Luminoso en la región andina. Kalyvas–Arjona afirman que los grupos paramilitares siempre están ligados al Estado y su actividad central es la producción de violencia en todas sus formas: “Los paramilitares son grupos armados que están directa o indirectamente vinculados al Estado y sus agentes locales conformados por el Estado o tolerados por este, pero que se encuentran fuera de su estructura formal”<sup>26</sup>.

En esta definición las milicias de los partidos políticos son excluidas, como también los grupos de actividades criminales y los que emergen en el contexto de un estado en colapso como las milicias Somalíes. En el trabajo de Khalyvas y Arjona, la clasificación tipológica de las organizaciones paramilitares origina cuatro grupos distintos:

Los “Esporádicos”, o “Vigilantes” ,que corresponden a grupos que han usurpado temporalmente el poder de las fuerzas del Estado y el monopolio de la violencia, actuando preferentemente a nivel local a través de grupos conformados por civiles, para controlar el crimen o hacer cumplir las normas sociales. Son por lo general defensores de cierta clase social y se involucran en actos violentos a tiempo parcial. Por su parte, los “Escuadrones de la Muerte”, que tienen una dimensión supralocal, operan bajo una cadena nacional de comando y están ligados a agencias de alto nivel del Estado. Sus integrantes tienden a tener un carácter de profesionales de la violencia, dedicados a tiempo completo, como los que operaron en el contexto de la guerra civil de El Salvador en la década de 1980. Por otra

<sup>24</sup>Campbell Bruce, “Death squads Definition, problems and historical context”, New York St Martin Press, 2000.

<sup>25</sup>Cubides Fernando “Los paramilitares y su estrategia”, Ediciones Uniandes, Bogotá 1999, pp 151-159.

<sup>26</sup>Kalyvas-Arjona Op. cit., pp 29-30





parte, las “Milicias de Autodefensas locales” o “guardianes”, formaban parte de una red más amplia y extensa coordinada por el ejército y la policía, en la cual sus integrantes actuaban, en el espacio local, a tiempo parcial, siendo su principal propósito el control de la población. Estas organizaciones realizaban tareas de información acerca de los simpatizantes de la guerrilla, como fue la experiencia de Guatemala en los años 80, o tareas de contrainsurgencia, pero en lo fundamental cumplían un papel defensivo de tipo policial y de defensa de la población. Finalmente están “los paramilitares”, organizaciones del tipo ejército, de gran número y móviles, que operan en superficies extensas y se mueven en diferentes zonas al mismo tiempo. Se caracterizan además por poseer un comando unificado y tienden a parecerse a los ejércitos guerrilleros. Esto es evidente de modo particular para Colombia.

Otras modalidades de paramilitarismo, como el de los serbios en las guerras de los Balcanes de la década de 1990, operaban bajo varios líderes<sup>27</sup>. Los ejércitos paramilitares funcionan desde fuera y en ocasiones desde dentro del espacio político del Estado, como ocurre en Colombia con la llamada parapolítica. Constituyen una especie de “outsourcing” de la violencia estatal. Su existencia está siempre en relación a la construcción del Estado del país en que operan. Por cierto los Estados fuertes no necesitarán privatizar la violencia, “o contratar a terceros”, ya que pueden controlar de manera efectiva o reprimir las amenazas externas usando su aparato policial normal. En cambio, los Estados débiles deben afrontar estas amenazas internas apelando a la privatización y el “outsourcing”<sup>28</sup>.

Dentro de este debate, el politólogo Mauricio Romero afirma que “los paramilitares son fuerzas armadas irregulares que obedecían a proyectos nacionales de expansión, con una estructura relativamente centralizada, federativa y con un claro propósito contrainsurgente”<sup>29</sup>. El historiador colombiano Carlos Medina Gallego realizó un estudio considerado emblemático sobre el paramilitarismo en su locación de origen, Puerto Boyacá, ubicado en la región del Magdalena Medio.<sup>30</sup> En su investigación identifica al paramilitarismo y a las autodefensas como dos formas distintas de organización de ganaderos y terratenientes que corresponden a momentos diferentes. Según él, los grupos paramilitares, “se estructuraron como ejércitos privados, grupos de civiles organizados, uniformados, que incluso patrullaban zonas de influencia de la guerrilla acompañando al ejército”<sup>31</sup>. Las autodefensas, en cambio, doblemente institucionalizadas en el decreto 3398 de 1965 y la ley 48 de 1968, implicaron la privatización de la fuerza, obedeciendo a un proyecto más amplio de carácter militar, que buscaba crear “una correlación de fuerzas que evitara el enfrentamiento con la guerrilla”<sup>32</sup>. La fundación de AGDECAM en Puerto Boyacá el 22 de octubre de 1984, fue un proyecto social, militar y económico antisubversivo, lo que constituyó un hecho inédito y pionero en la historia del conflicto interno.

<sup>27</sup>Kalhyvas, op. cit., pp. 34-36

<sup>28</sup>Romero Mauricio, Op. cit.

<sup>29</sup>*Ibid.*, p. 29

<sup>30</sup>Medina Gallego Carlos y Téllez Ardila Mireya, “La Violencia Parainstitucional, Paramilitar y Parapolicial”, Rodríguez Quito editores, Bogotá, 1984.

<sup>31</sup>Medina, Op. cit., pp 94.

<sup>32</sup>*Ibid.*, pp. 94-95



Desde el punto de vista de este artículo, las autodefensas colombianas corresponden a segmentos organizados de la población que se organizaron como fuerzas irregulares. Se localizaban en zonas rurales y con alta debilidad estatal respecto al control del orden público y la defensa de la propiedad. Además, no contaban con servicios ni políticas públicas. Su objetivo era defender un territorio sin vocación expansionista ni incidencia en otras regiones, “constituyendo fenómenos perfectamente locales”<sup>33</sup>. Desde el punto de vista político, no se planteaban confrontar al Estado sino defenderse de amenazas ante la ausencia o débil presencia de éste. Los paramilitares, en cambio, suplementan acciones del Estado en la lucha contrainsurgente. Así, éstos desbordan su origen regional o local para plantearse a nivel nacional, abarcando espacios propios del poder político en la perspectiva de control, cooptación, captura o configuración cooptada del Estado<sup>34</sup>.

En Colombia, las autodefensas fueron el camino institucionalmente constituido por los gobiernos de León Valencia y Turbay Ayala para el surgimiento del paramilitarismo, sustentadas y respaldadas por la relación entre finqueros, narcotraficantes y militares colombianos. Este trío fue denominado por el Senado de los EEUU como el “triángulo del terror”<sup>35</sup>.

## 2. La Unión Patriótica (UP) la “tercera fuerza” aniquilada y objetivo militar de la violencia paraestatal en la defensa del statu quo y la propiedad.

Un componente generador de la violencia en Colombia radicó en la existencia, permanencia y reproducción de un sistema de dos partidos políticos, liberales y conservadores, que se repartieron la conducción del estado desde la formación del “frente nacional”, en la década de 1950. No se trata del único modelo bipartidista en la región, como lo demuestra el caso de Venezuela en los años 70 y 80, que también dio forma a un modelo bipartidista conocido como “punto fijo”. La diferencia en el caso de Colombia era su carácter excluyente, intolerante y agresivo.

La exclusión de competidores “sistémicos” fue un rasgo permanente del bipartidismo colombiano. El mejor ejemplo del siglo XX lo constituye la incorporación política de la “Unión Patriótica” (UP) y del Partido Comunista Colombiano (PCB) en 1985-86 y su posterior exterminio. La UP nació como consecuencia de los diálogos de paz impulsados por el Presidente Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que culminaron en el llamado “Acuerdo de la Uribe”. Como parte de ellos, y en el marco de la línea táctica del PCB de “todas las formas de lucha” desplegadas desde 1961, parte de los cuadros y militantes fareanos se aprestaron a participar en el sistema político a través de una organización política, sin que ello haya significado terminar

<sup>33</sup>López Claudia, op. cit, pp. 93

Romero Mauricio op. cit.

<sup>34</sup>López Claudia Op. cit.

Garay Salamanca Luis Jorge y Salcedo-Albarán Eduardo, “Redes Ilícitas y reconfiguración del Estado: el caso de Colombia”, Fundación Vortex y Centro Internacional de la Justicia Transicional ICTJ, Bogotá, 2012.

<sup>35</sup>Medina, Op. Cit, pp. 170.

con la organización guerrillera. La UP obtuvo importantes triunfos electorales en alcaldías y curules entre 1985-1989, en especial en el noroccidente del país. Obtuvieron 5 senadores y 9 diputados en 1988 en las primeras elecciones de la historia de Colombia con sufragio universal. Pero también y como una muestra de la intolerancia y el carácter excluyente del bipartidismo, sufrió los rigores del exterminio de sus militantes. De acuerdo a los reportes del Relator de la ONU, Amnistía Internacional, y la Defensoría del Pueblo de Colombia, la UP, fue víctima de un genocidio<sup>36</sup>

Entre 1985-1989 fueron asesinados 800 miembros y activistas; cinco mil más sufrieron ataques, fueron asesinados 7 congresistas, 13 diputados, 69 concejales y 13 alcaldes. Además de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal en 1985 y Bernardo Jaramillo Ossa en 1989. Destaca en este proceso de exterminio la masacre de 1985 en Segovia, Antioquia, que dejó 43 militantes asesinados. Las cifras sobre el exterminio de los militantes de Unión Patriótica es variable, no hay claridad aún.

Tras esta política se encontraba una variada mezcla de actores políticos, militares, caudillos locales, capos del narcotráfico y paramilitares que desplegaron una guerra sucia con acciones que violaban el Derecho Internacional Humanitario. Expresaron la reacción de las elites regionales a los acuerdos de paz que situaron a las guerrillas como un actor político competitivo ante los viejos cuadros del liberalismo y conservadurismo, afianzados en fortines de la Colombia profunda como enclaves inamovibles de poder.

### 3 Bases Fundacionales de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC

Bajo la denominación de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entidad armada de carácter para estatal e ilegal constituidas en el mes de abril del año 1997, se aglutinaron inicialmente nueve estructuras armadas existentes en el país, con distintos niveles de cohesión y robustez organizacional, fortaleza militar, control territorial de los recursos y de los poderes políticos locales o regionales, partes del Estado nacional, como alcaldes, gobernadores o representantes al poder legislativo. Formaron parte fundacional de las AUC los líderes de las organizaciones paraestatales que operaban en el Meta Magdalena Medio Córdoba y Urabá, sin duda la de mayor desarrollo, influjo y capacidad hegemónica, concentrada en el liderazgo de los hermanos Castaño: Carlos, a la larga comandante visible de las fuerzas militares y Vicente, verdadero estratega y operador político de la organización.

“Con la ayuda del Comandante Rodrigo (“Doble Cero”) redactamos los primeros estatutos de las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las ACCU. Desde ese momento también entró en vigencia el primer régimen disciplinario interno. En lo militar iniciamos la fuerte propagación de la Autodefensa de Urabá. Todo ello sucedió entre junio de 1994 y el 18 de abril de 1997 cuando nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia”.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>El Tiempo, 22 de julio 2013.

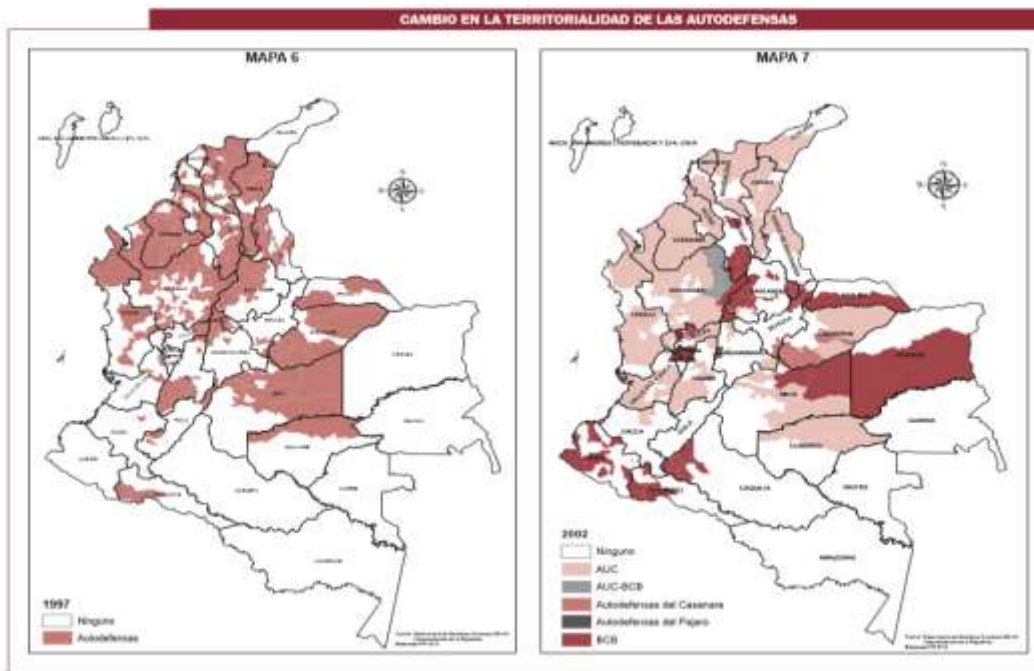
<sup>37</sup> Aranguren Molina Mauricio, “Mi confesión: Carlos Castaño revela sus secretos”, Editorial Oveja Negra, Bogotá, 2001, pp. 165.



Debe recordarse que el forjador de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, Fidel Castaño, murió aparentemente en 1994 en un enfrentamiento con elementos de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación EPL, de la fracción de Francisco Caraballo. Esta no formó parte y desistió acudir a la desmovilización de la organización liderada por Bernardo Gutiérrez en 1991 bajo el gobierno de Cesar Gaviria.

Las AUC conformaron una federación de estructuras armadas que operaron por el territorio colombiano, con mayor presencia en el nordeste del país, dentro de un diseño de expansión territorial que alcanza su cota más alta entre 1998-2000. Esto produjo el despojamiento de la tierra de campesinos pobres aterrorizados por el paramilitarismo, que los sindicó como parte de la guerrilla. Junto al proceso de expansión territorial y la violación masiva de los derechos humanos, las AUC se vincularon crecientemente al narcotráfico y sus “capos” como fundamento financiero de sus operaciones. Estos, según Carlos Castaño, representaban el 70% de los ingresos de la organización.

Las AUC fueron denominadas organización “terrorista internacional” desde el año 2001 hasta el 2014. Durante el siglo XXI acentuaron las modalidades de control político local y extendieron su accionar en pos de la captura del Estado. Este proceso se denominó “parapolítica”, dando forma a un rimbombante acuerdo denominado “Pacto de Ralito con afanes refundacionales, abriendo un espacio proyectual nacional con apoyo de senadores, alcaldes y empresarios.



Esta organización armada se autonombra como “Autodefensas” como una manera de separar aguas con el “paramilitarismo” y conectarse con la tradición de violencia privada institucionalizada entre 1965-1990, retomada como política del estado a partir de 1994 a

través de las “convivir”. “los paramilitares hacían masacres y mataban gente inocente, nosotros (las auc) solo matamos guerrilleros”<sup>38</sup>.

Las auc fueron continuadoras de las autodefensas, pero bajo nuevas formas, basado en un discurso antisubversivo y una importante ocupación del territorio nacional. esto originó verdaderos micro estados, antiguos componentes del conflicto interno. entre estos elementos de continuidad “amplificada” destacamos los aspectos que analizamos a continuación.

En primer lugar las AUC fueron portadoras de una larga tradición de privatización de la violencia, en el marco de la incapacidad del estado para ejercerla monopolícamente y controlar el orden público de la totalidad del territorio nacional. Se puede afirmar que las formas armadas privadas son parte de la historia nacional colombiana probablemente desde mediados del siglo XIX. Fueron institucionalizadas en el contexto de la Guerra Fría en la década de 1960, haciéndolos parte de las acciones de las FFAA para el control de orden público, la defensa de la propiedad y la lucha contra guerrillera. Con el tiempo, se vincularon a redes mafiosas de productores esmeralderos en los años 70 y de la comercialización de la cocaína en los 80. Esto modificó definitivamente las modalidades de acción, control y defensa de los recursos o la propiedad. Aunque esta modalidad de violencia privada se diversificó por el territorio, en el siglo XX se concentró preferentemente en el nordeste en las regiones del Magdalena Medio, Córdoba y Urabá. Las AUC, en consecuencia, fueron tributarias de esta tradición y continuidad histórica. Sus máximas expresiones, como decíamos, fueron en Puerto Boyacá en los años 80 y en las “Autodefensas de Córdoba y Urabá “ACCU en la segunda mitad de la década de los 90. De estos dos modelos, las AUC representaron su continuidad ampliada, cuya característica era la de ser “facciones armadas de los capitalistas rurales y narcotraficantes para convertirse en ejércitos que imponen la seguridad capturan excedentes de producción, administran justicia e imponen la supremacía de sus Comandantes a nivel local”<sup>39</sup>.

En segundo lugar, las AUC expresaron la violencia contra la población civil, preferentemente el campesinado, por parte de propietarios tradicionales de la tierra o nuevos componentes de estos vinculados al narcotráfico. En la base, las AUC dieron continuidad a la resolución del conflicto de clases del campo colombiano agudizado tras la frustrada Ley de Reforma Agraria de 1965 y la Contrarreforma de los gobiernos de Misael Pastrana y López Michelsen entre 1974-1978. Es decir, afirmamos que en el origen basal del nacimiento, acción, éxitos políticos, militares y desintegración de las AUC estuvieron presentes un conjunto de conflictos y nuevos actores. Por un lado, la tenencia de la tierra, las desigualdades en el acceso a ésta, la falta de Estado. Por otro, la irrupción de una nueva clase terrateniente de origen popular, apoyada en los ingresos del comercio de las drogas, lo que transformó el orden social rural. Esto impuso nuevas jerarquías sociales sustentadas en la violencia de organizaciones armadas.

<sup>38</sup> Escuelas de formación del Bloque Central Bolívar en “El Tiempo”, diciembre 2012.

<sup>39</sup> Duncan Gustavo, “Del Campo a la Ciudad, en Colombia, la Infiltración urbana de los sectores de guerra”, Versión electrónica, Enero 2005, pp. 20.



En tercer lugar, las AUC fueron tributarias de la incapacidad de las élites nacionales para impulsar un proyecto modernizador desde un ámbito democrático, capaz de competir con expresiones ideológicamente diversas y de mantener el orden público y el respeto a los derechos humanos. Por el contrario, las élites políticas no fueron capaces de procesar los conflictos de modo pacífico y democrático, de la mano de un Estado que fue perdiendo paulatina y crecientemente en el siglo XX el monopolio de la fuerza. Esto, que podríamos denominar el nudo fundamental de la violencia política del país, se anida en la base del conflicto. Aun cuando el dato superficial informe de la existencia de una continuidad democrática y ausencia de Dictaduras de Seguridad Nacional en las décadas de los 60, 70 u 80, Colombia fue un país donde los actores sociales usaron la violencia en la resolución de las diferencias políticas durante este mismo período.

#### 4. Las Autodefensas de Córdoba y Urabá ACCU, la consolidación de un estilo de violencia paraestatal y el liderazgo de los Castaño, 1988-1996

Las AUC estuvieron estrechamente vinculadas a los hermanos Castaño Gil, originarios de la campesina región de Amalfi, Antioquía. Esta suerte de simbiosis la expresó Carlos Castaño de modo prístino cuando afirmaba que “las AUC son totalmente obra mía y nadie creyó en ellas al comienzo”<sup>40</sup>. También es observable en la presencia de Vicente, quien se definirá como el “estratega” de la organización y al accionar de quien inició la vinculación familiar con las bases de las AUC Fidel Castaño, “Rambo”. Resulta complejo establecer las cronologías respecto del accionar de los hermanos Castaño, que en la ciudad de Córdoba dieron forma en 1994-95 a las ACCU y en abril de 1997 a las AUC. Por esto proponemos establecer una periodización como una manera de entender el crecimiento y expansión paramilitar de las ACCU, que incluye las acciones y directrices fundamentales de la organización nuclear de las AUC.

Un primer momento corresponde a la instalación de los Castaño como ganaderos, en particular las adquisiciones de tierras de Fidel a mediados de 1980 en la región de Córdoba, hasta dominar la parte norte del alto Sinú. Esto se vio acompañado del aumento de las hostilidades y presiones de la guerrilla (EPL y FARC) sobre los ganaderos. Fue durante este período, que abarca hasta la primera mitad de los 90, cuando Fidel desarrolló su estructura militar y la ofreció a los ganaderos de la región, operando como “empresario de la violencia o coerción”<sup>41</sup>. Contaba con el soporte activo de un contingente de “enfusilados” provenientes del modelo paramilitar de Puerto Boyacá y como una forma de sellar las relaciones de amistad con el líder del Magdalena Medio, Henry de Jesús Pérez.

En su accionar armado contra el movimiento campesino y la izquierda, la estructura armada de Fidel Castaño expresaba materialmente el rechazo de los ganaderos de la región de Córdoba las negociaciones de paz de la guerrilla con los presidentes Betancur y Barco. Asimismo, la defensa de las jerarquías locales rurales que sentían amenazadas por la presencia de las fuerzas guerrilleras. Los adversarios y víctimas fueron el movimiento

<sup>40</sup>Aranguren Molina Mauricio, Op. cit., pp. 201.

<sup>41</sup>Romero Mauricio, Op. cit.

campesino, sindical y las expresiones políticas de izquierda como el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar<sup>42</sup>.

En este período apareció el modus operandi propio del paramilitarismo en el conflicto armado: la masacre como una modalidad de exterminar posibles redes de apoyo a la guerrilla y sobre todo para aterrorizar a la población civil, obligándola al desplazamiento para así arrebatarles la tierra:

Fidel escogió el departamento de Córdoba como nuevo destino para hacerse de buenas fincas que empezaban a ponerse baratas<sup>43</sup>. Salieron del escenario quienes no pudieron adecuarse a la presión de los actores armados y llegaron quienes “habían hecho fortuna con las drogas acostumbrados a lidiar el riesgo con la corrupción y la violencia”.<sup>44</sup>

Un segundo momento se inició hacia 1994 y junto a la supuesta muerte de Fidel Castaño y la herencia de mando en su hermano Carlos, se forjó en el seno de la iniciativa gubernamental de las “Convivir” y las AUC, la más poderosa y extendida conformación paramilitar existente hasta entonces.

El tercer momento se produjo a partir de 1996 en el marco de la ofensiva de las ACCU hacia los reductos de las FARC en Urabá. El objetivo era controlar el Parque Nacional del Nudo de Paramillo, verdadero corredor estratégico para la circulación libre de armas, drogas y hombres uniendo dos océanos. Este período culmina con la formación el 17 de abril de 1997 de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.

## 5. El primer período 1985-1990 la impronta de los Castaño

Hacia 1985 Fidel Castaño se desplazó a la zona de Urabá y Occidente de Córdoba, comprando fincas u obteniéndolas por la violencia, con el objetivo de crear un corredor estratégico para el narcotráfico con la ayuda de las Autodefensas del Magdalena Medio. Conformó grupos militares con nombres distintos o tal vez se trataba del mismo que usaba diferentes nomenclaturas para causar más impacto público con sus acciones violentas “Los Tangueros”, “Mocha cabezas”, “Muerte a los revolucionarios del nordeste” o “Los Magníficos”, pasaron a la historia de la región por ser los responsables de las masacres que se desencadenaron desde marzo de 1988 en el contexto de las primeras elecciones democráticas de alcaldes de la historia de Colombia. Fue durante estos años cuando Fidel Castaño comenzó a denominar a todos estos grupos como “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”, ACCU. Este nombre dejó de usarse entre 1991-93, período en que Fidel se unió a la lucha contra Pablo Escobar en los PEPES (“Perseguidos por Pablo Escobar”).

<sup>42</sup>Romero Mauricio, Op. cit.

Cepeda Iván, Rojas Jorge. “A las puertas del Ubérrimo: el origen del Paramilitarismo y la parapolítica en Cordoba”.

<sup>43</sup>Ronderos María Teresa, “Guerras Recicladadas. Una historia periodística del Paramilitarismo en Colombia”, Ed. Aguilar, 2014, Bogotá, pp. 167.

<sup>44</sup>*Ibid.*, pp. 167-168.

A su muerte, su hermano Carlos volvió a usar la denominación de ACCU para aglutinar todas las bandas paramilitares de la región<sup>45</sup>.

La siniestra denominación de uno de los grupos paramilitares de Castaño como “Los mochacabezas” parece explicarse por su accionar criminal en Córdoba y otras regiones o departamentos del país, como Valle o Urabá. El feroz ensañamiento con las víctimas campesinas indefensas hizo del descuartizamiento de éstos una práctica corriente. En su estilo particular de adecuación de la realidad de muerte provocada por sus dirigidos Carlos Castaño señala que:

“A partir de un caso en la zona de las Chingas, la guerrilla, en su guerra de desinformación, nos acuñó el término de “Mochacabezas”...regaron el cuento y asustaron a la gente de la región”. El hecho en cuestión, relatado por Carlos Castaño, se originó por la supuesta violación de una hermana de un reservista del ejército por parte de un comandante guerrillero del EPL. El soldado detectó a los hombres en una cantina, cogió un machete y decapitó al guerrillero”.<sup>46</sup> Exponemos este relato como una forma de poner en evidencia, en las declaraciones de los Castaño, una línea argumentativa distinta de la realidad demostrada en los relatos de la población y un número importante de mentiras en su acercamiento comunicacional a la sociedad. Esta estrategia de reconocimiento político la comenzó a utilizar de modo preferente desde inicios de la década del 2000.

La conexión familiar no fue fruto del azar o solo de las actividades violentas, e ilícitas de los tres hermanos Castaño. Esta ha sido presentada por ellos mismos como una suerte de mito fundacional contenido en el asesinato de su padre -José de Jesús Castaño- durante el secuestro a que lo sometió las FARC en 1981. Este hecho le otorgaba a la salvaje acción violenta de los Castaño un matiz justiciero, en una “lucha justa” contra los adversarios guerrilleros por restaurar el imperio de la ley que el Estado colombiano no era capaz de hacer por sus falencias e incapacidades. Como dice Carlos Castaño: “Yo soy una víctima de la falta de Estado en este país”<sup>47</sup>. Lo señalaba como el hecho trágico que inclinó su vida por la violencia :“Yo puedo perdonar todo lo que he pasado en estos veinte años de guerra pero la muerte de mi padre no, a veces lo veo como el culpable de todos los que yo he tenido que matar”.

En el libro “Mi Confesión” Carlos relata la travesía del secuestro de su padre, lo injusto del hecho dada la “amistad” que había entre su familia y el frente de las FARC que operaba en la zona, el que, según cuenta, en ocasiones acampaba en la finca de su padre. Además, de las traiciones y humillaciones a los que fueron sometidos para cumplir con el oneroso costo del rescate, que en total fue de 80 millones de pesos, cifra altísima para la época. La dignidad de su padre secuestrado y su asesinato posterior a manos de la guerrilla habrían cambiado el destino de un joven que en 1982 recién tenía 15 años: “Así nació nuestro problemita con la guerrilla, ahí comenzó la venganza de los hermanos Castaño. Nunca nos devolvieron el cadáver de mi padre y durante esos meses las FARC regó el cuento de que por la carta de Fidel lo habían asesinado”<sup>48</sup>. Tras este hecho trágico los habría llevado,

<sup>45</sup> Rutasdelconflicto.com

<sup>46</sup> Aranguren, Op. cit. P.157

<sup>47</sup> Aranguren Mauricio, Op. cit., pp. 56-58.

<sup>48</sup> Aranguren Mauricio, Op. cit., pp. 64-66.





junto a Fidel, a ejecutar la mayor parte de los asesinatos de su padre: “comenzamos a ser justicieros”, dice en su confesión. Pero entendió al mismo tiempo que la mera venganza no bastaba para hacer justicia. Por esto, para enfrentarse en el terreno militar con éxito a la guerrilla, se propusieron constituir una organización armada similar a esta pero defensora de la propiedad, la clase media y del Estado.

La investigación de la periodista María Teresa Ronderos ha intentado desmontar, a partir de las evidencias encontradas, las condiciones de la muerte del padre en cautiverio como punto de partida casi legítimo en pos de la justicia de los Castaño. Se han expuesto confusiones y contradicciones en la relación de los hechos. En torno a las cantidades demandadas por la guerrilla, aparecerían las primeras inconsistencias y diferencias de acuerdo quien lo relate. Para Fidel, el rescate pedido por la guerrilla era de 46 millones de pesos de entonces; mientras que Carlos habla de 120 millones, cifras poco creíbles para la época. Similares diferencias existen respecto de los relatos de los hermanos Castaño sobre la fecha del secuestro y las reacciones familiares<sup>49</sup> por lo cual que la venganza fuese “el único motivo que explique por qué el paramilitarismo surgió en esa zona es una parte del mito más endeble”<sup>50</sup>.

En la década de 1980 las estructuras armadas paraestatales eran un componente frecuente en distintas regiones del país, como las existentes en las regiones del Magdalena medio, San Vicente del Chucuri o Putumayo por nombrar algunas de ellas<sup>51</sup>. Expresaban la extensión de la privatización de la violencia, con asentamiento en regiones que tenían dos características: acceso a importantes recursos económicos (como tierras y los provenientes del narcotráfico) y en segundo lugar, una presencia activa de frentes guerrilleros de las FARC o EPL y que desde las elecciones democráticas de alcaldes de 1988, con resultados proclives a la izquierda aglutinada en la Unión Patriótica o Frente Popular. Fue sin embargo en Córdoba, región ganadera del noroeste antioqueño, y en el eje bananero de Urabá, donde el paramilitarismo dio forma a la organización más fuerte y socialmente extendida conocida hasta entonces: las Autodefensas de Córdoba y Urabá, ACCU. Esta reprodujo un modelo de violencia y dominio de la sociedad que ya había sido “ensayado en una pequeña población de la región del Magdalena medio en el municipio de Puerto Boyacá”<sup>52</sup>.

Las ACCU era una estructura armada formada y liderada por los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, con el apoyo de comerciantes y ganaderos de Córdoba y del Batallón de ejército Bomboná, acantonado en la región, tal como lo demuestran todas las evidencias históricas<sup>53</sup>. La relación con el ejército quedó más en evidencia en la exposición pública y posterior juicio que se le hizo al General Rito Alejo del Río de la XVII brigada establecida

<sup>49</sup>Ronderos María Teresa, Op. cit., pp.160-162.

<sup>50</sup>*Idem*.

<sup>51</sup> Medina Gallego Carlos, Op. cit., 109-153.

<sup>52</sup>Cepeda Iván, Rojas Jorge, Op. cit., pp. 49.

<sup>53</sup>Romero Mauricio, Op. cit.

Medina Gallego Carlos, Op. cit.

“¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y seguridad” del Informe general Grupo de Memoria Histórica, Centro Nacional de Memoria Histórica, Julio 2013.

Ronderos María Teresa, Op. cit.

Cepeda Iván, Rojas Jorge, Op. cit.



en Urabá, dado de baja en el año 1998<sup>54</sup>. Según hoy se sabe, este estableció relaciones operativas contrainsurgentes junto a las ACCU.

## 6. Córdoba: Escenario de lucha social y defensa del “statu quo” de las clases dominantes

De acuerdo a lo referido por Carlos Castaño, la llegada a la región fue un hecho casi circunstancial en la búsqueda de un espacio territorial y político en el cual replicar el “modelo exitoso de puerto Boyacá”<sup>55</sup>. El lugar en cuestión, ubicado en el noroeste antioqueño, había sido el escenario de conflictos sociales desde la década de los 60, de contenidos predominante agrarios. Su origen se encontraba en la lucha de los campesinos por la equitativa propiedad de la tierra, enormemente concentrada en manos de las élites locales. La ley de reforma agraria implementada bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo a mediados de la década de 1960, realizada en el marco de la iniciativa de los EEUU conocida como “Alianza para el Progreso”, encontró una violenta oposición de los propietarios de la región de Córdoba. Esto, unido a otras zonas que la rechazaron, terminó en un corto período de 10 años, por dar al traste con esta iniciativa de reforma social. Las administraciones de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) y Alfredo López Michelsen (1974-1978) fueron desmontando la Reforma Agraria y al mismo tiempo impusieron un modelo capitalista en el agro incentivando las empresas agroindustriales<sup>56</sup>.

“Nunca hubo una Reforma Agraria y la resistencia de la clase tradicional a cualquier intento de tenencia y uso de la tierra ha sido constante”<sup>57</sup>. La ley 6 de 1975 fue el golpe final a la reforma Agraria. Esta significaba el cumplimiento de los llamados “Acuerdos de Chicoral” firmado entre el Presidente Pastrana los partidos políticos tradicionales y los gremios tradicionales del agro e industriales en la perspectiva de mantener el statu quo y las jerarquías sociales”.

En Córdoba, la acumulación y concentración de la propiedad de la tierra fue el resultado de “la expropiación y pauperización del pequeño propietario y de obligada proletarianización del mismo que ha dado un cuadro de tenencia de la tierras bien conflictivo”<sup>58</sup>. Expresado en cifras, de 280 mil hectáreas existentes en la región, 230 mil se encontraban en manos de 122 propietarios; mientras que 43 mil eran ocupadas por 35 mil campesinos pobres<sup>59</sup>. Otros datos confirman la concentración de la propiedad agraria del Sinú. Según el abogado Rafael Yances Pinedo, para las últimas dos décadas del siglo XX, 80 propietarios controlaba el 40% de la tierra, mientras que 2000 campesinos accedían al 3% de esos fértiles suelos. Las condiciones para el conflicto social y el estallido de la lucha

<sup>54</sup>Romero Mauricio, Op. cit.

<sup>55</sup>Aranguren Mauricio, Op. cit.

<sup>56</sup> “Colombia. Nunca más”, Memoria de Crímenes de lesa humanidad. Recuperado de [www.movimientodevictimas.org](http://www.movimientodevictimas.org) en Agosto 2015.

<sup>57</sup>Cepeda Iván, Rojas Jorge, Op. cit., pp. 33.

<sup>58</sup>Medina Carlos, Op. cit., pp.108-109.

<sup>59</sup>Medina Carlos, Op. cit.

Cepeda Iván, Rojas Jorge, Op. cit.

de clases en la región de Córdoba se encontraban, hacia las décadas de los 70 y 80, plenamente abonados y catalizados, con las expresiones de las clases dominantes tendientes a rechazar toda posibilidad de reforma de la propiedad y modificación de las condiciones de vida de los campesinos pobres graficados así:

No es posible entregar a campesinos pobres tierras explotadas adecuadamente es absurdo despojar a los actuales y laboriosos ganaderos para entregar los fundos a millares de campesinos desnutridos, analfabetos, viciosos, alcohólicos, perezosos y parasitados<sup>60</sup>.

En este escenario conflictivo fue donde, junto a la movilización social campesina y más tarde de obreros, docentes, estudiantes universitarios y empleados públicos, echaron raíces las ya mencionadas organizaciones políticas de la izquierda legal, como el Partido Comunista Colombiano y sus formaciones amplias como la Unión Patriótica, Frente Popular y A Luchar. Estos procesos que se vieron agravados por el acoso al que fueron sometidos los ganaderos por las acciones extorsivas de las guerrillas, que aumentaron a partir de 1985. La mayor parte de estas acciones y de secuestro de la élite regional eran realizadas por las FARC y el EPL. La región se convirtió en un espacio de creciente e inimaginable violencia en las décadas siguientes así “a pesar de su fracaso el intento de reforma agraria propiciado por el gobierno central tuvo un impacto profundo y duradero en la dinámica política local”<sup>61</sup>.

El Ejército Popular de Liberación, EPL organización político-militar de sello maoísta nacida en 1967 como parte del debate en Colombia de las diferencias sino-soviéticas que afectaron al movimiento comunista internacional a inicios de la década de los 60, había crecido, madurado e instalado en la región cordobesa haciendo de ésta una región vital y fundamental para el despliegue de sus políticas nacionales en el impulso de “todas las formas de lucha”.

De este modo, con estos actores sociales, políticos y militares, conflictos de clase manifiestos, alza en la votación de la izquierda (Unión Patriótica) que desmontaba el dominio tradicional del liberalismo, la élite ganadera sintió amenazado el orden social férreamente estructurado en torno a su propia égida. En los años 80 la región de Córdoba y la del alto Sinú se constituyeron en zonas de fuertes compras de tierras por parte de inversionistas provenientes de Medellín y vinculados al narcotráfico. Estos encontraron en la región las condiciones ideales para una adecuada y segura retaguardia, terrenos a bajos precios y la posibilidad propia de los mafiosos de ascenso social de codearse con lo más granado de la élite ganadera de la región<sup>62</sup>. Estos inversionistas realizaron importantes adquisiciones de tierras en el Alto Sinú, Montería y San Jorge, estableciendo alianzas con las élites locales “desafectas” de la autoridad central, con los que construyeron un potente aparato paramilitar.

<sup>60</sup> Cepeda Iván, Rojas Jorge, Op. cit., pp. 33.

<sup>61</sup> Romero op.cit. pp 79

<sup>62</sup> Gambetta Diego, “La Mafia Siciliana: El negocio de la protección privada”, FCE México, 2007.

Una élite amenazada que sentía “la hostilidad campesina” destructora del antiguo orden, como señalaba el senador conservador de la región Miguel Escobar Méndez<sup>63</sup>. Asolada además por la extorsión y el secuestro de las guerrillas, por culpa de un campesinado sometido a la demagogia de la izquierda, infiltrado por el marxismo que lo impulsaba a la rebelión, como señalaba con énfasis Rodrigo García Caicedo, dirigente ganadero cordobés y protagonista de los años del terror paramilitar<sup>64</sup>. Las condiciones eran propicias para que este sector social apoyara, financiara y protegiera a estructuras que pudieran cumplir las tareas de la protección de sus propiedades, personas y del jerárquico orden social amenazado. En este contexto y fundamentos surgió la estructura armada de Fidel Castaño, disponible y en condiciones de ofrecer sus servicios de responder a la demanda por seguridad y extirpación de los adversarios las FARC, EPL y Unión Patriótica en primer lugar.

Al igual que en otras regiones del país los protagonistas de la violencia paramilitar en Córdoba fueron durante algún tiempo objeto de prácticas de chantaje, boleteo, extorsión, abigeato, vacuna, retenciones económicas y secuestros de la guerrilla y la delincuencia común<sup>65</sup>.

La dinámica de los acontecimientos y del quehacer violento de los paramilitares incluyó como víctimas preferentes a los “guerrilleros de civil”, es decir población civil campesina. Esta se vio inevitablemente involucrada en el conflicto, conociendo todo el despliegue de la guerra sucia del paramilitarismo de Fidel Castaño. Las masacres se convirtieron en el instrumento atroz y palpable del accionar paramilitar y su accionar por quietarle el agua al pez. Los costos en vida fueron enormes; además, se produjo una explosión de población campesina desplazada, que aterrorizada, perdió sus casas, tierras, animales y su identidad e historia familiar. “Los desplazados se constituyen en problema de orden social y económico puesto que la satisfacción de sus necesidades demanda la realización de obras de infraestructura, adjudicación de viviendas, atención de salud y educación así como de políticas de empleo”<sup>66</sup> que el Estado no se encontraba en condiciones de resolver.

Pero al mismo tiempo, con esta acción los paramilitares se apoderaban de tierras y propiedades, aumentando sus zonas de influencia. Como lo señalara Carlos Castaño, la guerra no se trataba de cuanta gente moría, sino de cuanto territorio y recursos la fuerza se encontraba en condiciones de apoderarse. “La guerra no se mide a través de soldados muertos, los que fallecen son una estadística. Lo importante es el control de los territorios y si son cultivos de coca mejor”<sup>67</sup>.

Los llamados inversionistas antioqueños desplegaron iniciativas que suplantaron el poder del Estado en el marco de las negociaciones de paz de 1984-85, logrando hacer

<sup>63</sup>Romero Mauricio, Op. cit., pp.130

<sup>64</sup>*Ibid.*, pp. 133-134.

<sup>65</sup>Medina Carlos, Op. cit., pp.114.

<sup>66</sup>*Ibid.*, pp. 124.

<sup>67</sup>Aranguren Mauricio, Op. cit., pp. 203.

prevalecer su liderazgo como “empresarios de la coerción” y por consiguiente se respaldaron con el uso de la fuerza. El líder de estos empresarios de la violencia era Fidel Castaño, quien el 4 de abril de 1983 compró e inscribió en la notaria 15 de Medellín la finca “Las Tangas”, que se convirtió en el centro de sus operaciones armadas en la región y tumba clandestina para decenas de víctimas que dejó a su paso. Esta propiedad se vio incrementada con las de Jaraguay, Cedro, Campanas, Santa Mónica, Pasto Revuelto, Las Analias, Doble Cero y Santa Paula, para conformar una red de fincas desde donde impulsar sus actividades. Por cierto todas ellas fueron adquiridas con “plata o plomo”<sup>68</sup>.

La revista *Semana* del 21 de mayo de 1990, a través de un artículo titulado “Rambo”, describía a Fidel Castaño como un hombre de unos 30 años, que había dedicado su vida a “barrer de la faz de la tierra a quienes responsabilizó de la muerte por secuestro de su padre Jesús María Castaño por las FARC”, en alusión al “mito fundacional de las AUC”. Lo cierto es que los antecedentes de Fidel se tornan por momentos indescifrables. Obtuvo dinero de actividades comerciales que habría realizado cuando joven como trabajador minero en Venezuela; aparece vinculado a Pablo Escobar; primero como cercano y luego como persecutor en los “Pepes”; hizo dinero tempranamente para comprar una mansión en Medellín, Montecasino; admirador de la pintura y del buen vestir, viajero sofisticado, ganadero prominente, severo atleta y asesino reconocido todo en el mismo personaje. Para el jefe de Policía de Córdoba Alfonso Merchan, “este señor Castaño lo que hizo fue invertir en la región el dinero que ganaba en otras regiones con sus bases ilícitas” (Lo que era indesmentible era su vinculación con los paramilitares de Puerto Boyacá y su jefe Henry de Jesús Pérez, que formó parte del grupo de exterminio de la Unión Patriótica entre 1984-1985 llamado “Los Masetos”). La vinculación con esta asociación criminal lo hizo aparecer vinculado al asesinato del candidato presidencial de la UP Bernardo Jaramillo en 1989. Aprovechando sus habilidades en la violencia, sus relaciones de amistad con la estructura armada de Puerto Boyacá, esta le colaboró con 11 “enfusilados”, gracias a lo que Fidel Castaño instaló su grupo armado en Córdoba. Es también indesmentible el apoyo de las élites locales aún a conocimiento de sus atrocidades como lo expresa el líder de la asociación de ganaderos de Córdoba FEDEGAM Rodrigo García Caicedo: “En Córdoba Fidel Castaño Gil era una leyenda el que lo desconozca es un tonto”<sup>69</sup>.

Así se hizo realidad la definición de que “jefe guerrillero que se le ocurriera pasar por la zona de influencia de Rambo a cobrar, era devuelto en pedazos”, como relató a la Fiscalía el desertor de la organización Rogelio de Jesús Escobar alias “Relámpago”. La relación con los paramilitares del Magdalena medio y Henry Pérez no era nada nuevo para Fidel. Ésta se había manifestado en su accionar contra Pablo Escobar como parte de los PEPES y por supuesto que fue un aporte contundente en la formación armada de Córdoba. Carlos Castaño dirá que: “Es ahí cuando vuelvo a ser aliado de Henry siempre lo consideré un amigo sabía que se había equivocado al dejarse tentar por el poder corruptor del dinero de los nacos”<sup>70</sup>.

<sup>68</sup>Ronderos María Teresa, Op. Cit., pp. 168-169.

<sup>69</sup>Cepeda Iván, Rojas Jorge, Op. cit., pp. 57.

<sup>70</sup>Aranguren Mauricio, Op. cit., pp. 105.

Las actividades desplegadas por la organización de Castaño en la región con sede en “Las Tangas, “combinó acciones de defensa de los propietarios ganaderos contra la guerrilla, con operaciones de acoso y muerte a la población civil de pueblos adyacentes, especialmente en la que se diera fuerte presencia de la izquierda tras las elecciones de 1988. Las informaciones con que contaban los paramilitares las aseguran como correctas en la medida que fueron integrando desertores de los alzados en armas a sus filas. Estas acciones devastadores para la población rural indefensa de la región, fueron representadas con el atroz concepto de “masacres”, constituidas en la modalidad más utilizada en su plan de dominio local y de expansión nacional con la organización de los Castaño. Los enfrentamientos con la guerrilla fueron prácticamente inexistentes<sup>71</sup>.

Al igual que en el modelo paramilitar de Puerto Boyacá, los Castaño impulsaron la creación de una fundación, FUNPAZCOR (Fundación por la paz para Córdoba y el Urabá chocoano), con la que buscaron acercarse a la población, para así ganar las mentes y corazones dentro de su estrategia contrainsurgente y de violencia a la población civil no combatiente.

La estrategia consistía en la entrega de tierras de hasta 189 títulos de propiedad cada uno de 5 hectáreas por la “totalidad de las tierras que la familia Castaño posee en el Departamento de Córdoba”<sup>72</sup>, dirigida a las familias más pobres de la región con “hogares debidamente conformados y con numerosos hijos”. Las parcelas se entregarían aradas, se facilitaría la construcción de viviendas, un auxilio de 3500 pesos semanales el primer año. También tuvieron acceso a las tierras y apoyos de FUNPAZCOR guerrilleros desmovilizados del EPL, estableciendo por esa vía una relación cercana con los paramilitares de Castaño. Estas, en el marco de la guerra de Urabá, se habrían de consolidar<sup>73</sup>.

## 7. La masacre como metodología Paramilitar la degeneración del conflicto

El extenso conflicto interno y multiactoral fue progresivamente golpeando a la población no combatiente e indefensa de la llamada “frontera interna”<sup>74</sup> del país. En las zonas de actividad beligerante se produjeron eventos que tenían como consecuencia una importante cantidad de víctimas civiles, en una dinámica ascendente desde la década de los 80. Estos eventos denominados “masacres” involucraron a las guerrillas, al ejército colombiano y mayoritariamente a los grupos paramilitares.

De acuerdo a lo establecido provisionalmente por el Grupo de Memoria Histórica, entre 1982-2007 “Colombia ha vivido una guerra de masacres” que ha dejado 2505 masacres y 14.600 víctimas<sup>75</sup>. La masacre expresaba la degradación de la guerra y el total desprecio por la población civil. Eran una modalidad de violencia que “combina

<sup>71</sup> López Hernández Claudia, “Y refundaron la patria: De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado Colombiano”, Debate Agosto 2010, Bogotá.

<sup>72</sup> Medina Carlos, Op. cit., pp. 122.

<sup>73</sup> *Ibid.*, pp. 123.

<sup>74</sup> “El Conflicto callejón con salida” Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003

<sup>75</sup> “Trujillo una tragedia que no cesa”, recuperado de [www.centrodememoriahistorica.gov.co](http://www.centrodememoriahistorica.gov.co) en Agosto, 2015.

experiencias de horror con graves impactos para sus víctimas fueron una práctica de violencia continua en el conflicto armado”<sup>76</sup>. Los actores armados buscaban a través de ella infligir terror y despoblar territorios y tienen efectos profundos en la población desarmada que las experimentó. “A una parte de la población le quiebran el espíritu, le quemán las casas, y al saqueo añaden la pérdida de vidas”<sup>77</sup>. Por otra parte, el lugar en que ocurren, como templos religiosos, canchas públicas, escuela, era desprovisto de todo el significado ético o social que poseían y que se suponían de protección, resguardo y camaradería.

Como señala la Comisión de Memoria Histórica de Colombia, las masacres cumplieron una triple función. En primer lugar punitiva, por que buscaban “castigar” ejemplarmente a quien desafiara el equilibrio o la hegemonía impuesto por los actores parainstitucionales o institucionales armados del territorio. Era al mismo tiempo preventiva, pues su finalidad era garantizar el control de la población, rutas o territorios. En tercer lugar era simbólica, porque mostraba a los afectados que se podían romper todas las barreras éticas y normativas existentes<sup>78</sup>.

Consultado “Doble Cero”, ex oficial del ejército leal a Castaño hasta su muerte a manos de una fracción de las AUC tomadas por el narcotráfico, sobre la responsabilidad de las AUC en las masacres que se expanden desde fines de 1980, su respuesta ahorra todo comentario.

Lo que sucede es que en esta guerra cae mucha población civil ¿y sabe por qué? Porque las dos terceras partes de la fuerza efectiva de la guerrilla no tiene armas y está actuando como población civil aquí estamos viviendo una guerra civil y eso no lo comprenden en el exterior.<sup>79</sup>

Las consecuencias más significativas para la población involucrada eran variadas, aunque el desplazamiento forzado figuraba en primer lugar. Se trataba del abandono de la población civil, habitualmente campesinas, de sus tierras, casas, bienes, y animales. Iniciaban un peregrinaje que concluía con su asentamiento en barriadas pobres y conflictivas de los centros urbanos cercanos. La nueva realidad a que se enfrentaban los sometía al desarraigo, destrucción de la identidad y de los grupos familiares. “Implicaba pérdidas y transformaciones económicas de lugares, de relaciones sociales y afectivas”<sup>80</sup>.

Fueron particularmente significativos los grupos de víctimas menores de edad, huérfanos y en situación de abandono; además, personas indefensas, en medio de la ausencia de servicios de protección estatales. Este accionar bloqueó la estrategia insurgente en la región y neutralizó el potencial de acción colectiva campesino, en particular en regiones de acción social significativa como Córdoba o de potente movimiento sindical de economía de enclave, como en la bananera y geopolíticamente determinante región de Urabá.

<sup>76</sup>“Basta Ya!” Op. Cit., pp. 288.

<sup>77</sup> Basta Ya! Op.cit.

<sup>78</sup>(Grupo de Memoria Histórica)

<sup>79</sup> Castro Caycedo German “En Secreto” Planeta Bogotá 1996

<sup>80</sup>“¡Basta Ya!”, Op. cit.



En lo que va transcurrido del siglo XXI, la población desplazada por el conflicto interno de Colombia es la más numerosa del mundo después de Sudán. Constituye un largo proceso en que su mundo se erosiona y pulveriza por el accionar de los actores armados, quebrantando “sus certezas, y rutinas que sustentan la cotidianidad de las víctimas, es por lo tanto un evento complejo que altera los proyectos de vida de cada uno de los miembros de una familia”<sup>81</sup>.



Fuente: Policía Nacional.

El gráfico muestra con claridad que los principales responsables de las masacres en el escenario del conflicto fueron las “Autodefensas”. Las cifras crecen sobre todo para el ciclo 1999-2000, cuando las AUC estaban en pleno auge de consolidación y dominio territorial. Controlaban recursos, redes de poder y poder social que, en el siglo XXI, se extendió hasta el Estado. Este proceso llamado de “cooptación del Estado” o “Captura del Estado (Garay), movilizó en la práctica a políticos de distintas esferas del poder político, local, regional, legislativo y ejecutivo. Este fenómeno, llamado parapolítica (López) expresó exitosamente el objetivo de unas AUC cada vez más fragmentadas. Fue durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en que este proyecto finalmente colapsó, cuando los hermanos Castaño desaparecieron de la escena del conflicto e importantes jefes paramilitares terminaron sus días en cárceles de los EEUU, acusados de narcotráfico en tiempos en que las AUC son ya una organización criminal transnacional (Pereyra).

<sup>81</sup> “¡Basta Ya!”, Op. cit.



## Conclusiones

Las Autodefensas constituyeron un componente permanente de la historia colombiana sustentada en la falta de Estado y su incapacidad para resolver los problemas de tenencia de la tierra y colonización. Tal como el uso de la violencia en la resolución de las diferencias políticas se les puede rastrear en las profundidades del siglo XIX. En Colombia, la Guerra Fría, los imperativos de la modernización desarrollista, las reformas que le acompañaron, las confrontaciones de clases y los procesos revolucionarios de la década de los 60, produjeron el surgimiento de las guerrillas en la frontera interna del país sin estado. La reacción de la élites locales a la presión de la guerrilla, así como su resistencia a las reformas de propiedad, fatalmente entroncadas con la transformación de narcotraficantes en nuevos propietarios de la tierra y el apoyo de sectores del Ejército ,conformaron un denso mercado de la violencia, de señores de la guerra, de empresarios de la coerción. Estos impulsaron, a través de estructuras armadas otrora Autodefensas, ahora bajo la modalidad paramilitar, las tareas de contención y exterminio de la izquierda alzada en armas, el movimiento social y la población civil con el objetivo de resolver el conflicto político en favor de las elites locales, nacionales y transnacionales.

Las primeras experiencias paramilitares de los años 80 en el Magdalena Medio fueron replicadas en Córdoba y Urabá. Se debe consignar que la violencia paraestatal se desarrolló en diversas partes del territorio nacional con estructuras independientes. Algunas de estas federadamente originaron a las AUC, actor protagónico del conflicto interno colombiano, que tuvo una fuerte expansión territorial y política entre 1999-2002. Bajo un discurso contrainsurgente, desplegaron una estrategia política de copamiento del Estado y de accionar criminal que hoy tiene en las cárceles de los EEUU a sus principales comandantes ratificando de paso su carácter transnacional.

## Bibliografía

- Aranguren Molina, Mauricio, *Mi confesión: Carlos Castaño revela sus secretos*, Editorial Oveja Negra, Bogotá, 2001.
- “¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y seguridad” del Informe general Grupo de Memoria Histórica, Centro Nacional de Memoria Histórica, Julio 2013.
- Campbell, Bruce, *Death squads Definition, problems and historical context*, New York St Martin Press, 2000.
- Cepeda Iván, Rojas Jorge. “A las puertas del Ubérrimo: el origen del Paramilitarismo y la parapoltica en Córdoba”.
- “Colombia. Nunca más”, Memoria de Crímenes de lesa humanidad. Recuperado de [www.movimientodevictimas.org](http://www.movimientodevictimas.org) en agosto 2015.
- Corporación Observatorio para la Paz “Las verdaderas intenciones de los paramilitares” Intermedio, Bogotá 2002.
- Cubides Fernando, *Los paramilitares y su estrategia*, Ediciones Uniandes, Bogotá 1999.
- Deas, Malcom, *Reflexiones sobre la violencia política en Colombia*, Bogotá, Taurus 1999.
- Duncan Gustavo, “Del Campo a la Ciudad, en Colombia, la Infiltración urbana de los sectores de guerra”, Versión electrónica, Enero 2005.
- Garzón, Juan Carlos, “La complejidad Paramilitar: una aproximación estratégica” en Rangel, Alfredo et al, *El Poder Paramilitar*, Ed. Planeta Bogotá 2005.
- Gambetta Diego, *La Mafía Siciliana: El negocio de la protección privada*, FCE México, 2007.
- Garay Salamanca, Luis Jorge; Salcedo–Albarán, Eduardo, *Redes Ilícitas y reconfiguración del Estado: el caso de Colombia*, Fundación Vortex y Centro Internacional de la Justicia Transicional ICTJ, Bogotá, 2012.
- Gibson, Edward, *Subnational Authoritarianism Territorial Strategies of Political control in Democratic Regimes*, Northwestern University, September 25, 2004
- “Guatemala en la encrucijada del conflicto”, Secretariado de la declaración de Ginebra, Ginebra 2011
- Kaldor, Mary, *New and old Wars organized violence in a global era*, Polity Press, 2012, UK
- Medina Gallego, Carlos, *La Violencia parainstitucional paramilitar y parapolticial en Colombia*, Rodríguez Quito Editores, Bogotá, 1994
- Medina Gallego, Carlos y Téllez Ardila, Mireya, *La Violencia Parainstitucional, Paramilitar y Parapolticial*, Rodríguez Quito editores, Bogotá, 1984
- López Hernández Claudia, *Y refundaron la patria: De cómo mafioso y políticos reconfiguraron el Estado Colombiano*, Debate agosto 2010, Bogotá.
- Pereira Juan Carlos (coord.), “*Historia de las relaciones internacionales contemporáneas*”, Editorial Ariel Ciencia Política, Barcelona, España, 2009.
- Ronderos María Teresa, *Guerras Recicladas. Una historia periodística del Paramilitarismo en Colombia*, Aguilar, 2014, Bogotá
- Romero Mauricio, *Paramilitares y Autodefensas 1982-2003*, IEPRI, Bogotá 2003.
- Oquist Paul, “Violence Conflict and Politics in Colombia”, New York Academy Press.
- Trejos Luis Fernando, *Un actor no estatal en el escenario internacional el caso de las FARC-EP (1966-2010)*, Grupo Editorial Ibáñez-Universidad del Norte Barranquilla Colombia, 2015
- Trejos Rosero, Luis Fernando, “Actividad Paramilitar en la ciudad de Barranquilla crimen organizado y mercados de la violencia”, *Revista de Economía del Caribe*, Barranquilla, 2015

Patricio García, La privatización de la violencia en Colombia y las AUC: de las autodefensas al paramilitarismo contrainsurgente y criminal / The violence's privatization in Colombia and the AUC (Self-defenses United of Colombia): From the self-defenses to the counterinsurgent paramilitarism and criminal, Revista Izquierdas, 27, abril 2016, ISSN 0718-5049, pp. 230-255

-“Trujillo una tragedia que no cesa”, recuperado de [www.centrodememoriahistorica.gov.co](http://www.centrodememoriahistorica.gov.co) en Agosto, 2015.

-Stathis Kalyvas y Arjona Ana, “Paramilitarismo: una perspectiva teórica” en Rangel, Alfredo, *El poder paramilitar*, Planeta Bogotá 2005

- “El Conflicto callejón con salida” Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia 2003

<http://www.verdadabierta.com/>

<http://www.eltiempo.com/archivo/buscar?q=paramilitares+en+cordoba&producto=eltiemp>

<http://www.semana.com/Buscador?query=dosier%20paramilitar>